# Voces desde Colombia: Dos mujeres con discapacidad física comparten su experiencia sobre la pandemia de la COVID-19

*Los nombres originales han sido cambiados para proteger a las personas mencionadas en la historia.*

Angélica vive en una zona rural del departamento de Santander (ubicado en el centro del norte de Colombia), es una refugiada que emigró de Venezuela en busca de una vida mejor. “No tengo documentos y mis papeles no están en regla”, dice. Es una mujer de 25 años con discapacidad física y usuaria de silla de ruedas, al igual que sus tres hermanas.

Actualmente, en Santander, los residentes solo pueden salir de casa una vez por semana. Dependiendo del número de la célula de indentidad, será un día u otro. “Las sanciones son muy severas si te encuentran fuera de casa sin una justificación”, dice. A día 29 de septiembre, [hay 4.481 casos activos](https://coronavirus.santander.gov.co/) en la región.

## Falta de acceso a asistencia médica.

“La situación es muy caótica, especialmente ahora durante el COVID-19. Si no tienes suficiente dinero para pagar el seguro médico, es como si no existieras ”, dice Angélica. Ella explica que las personas solo son tratadas en los hospitales si se trata de una situación de vida o muerte. “No he podido seguir tomando mi medicamento porque no puedo encontrar un médico que acepte citas y me dé una receta. Todos están centrados en COVID-19 y no tengo seguro médico. No podemos pagarlo porque mi esposo perdió su trabajo ”. Angélica dice que muchas personas han decidido recurrir a la automedicación y a los remedios caseros, una práctica muy peligrosa. “Mi hermana, que tiene seguro médico tenía un sarpullido en las piernas. Le dijeron que un médico iría a su casa en las próximas 24 horas y nunca aparecieron”, relata.

Si Angélica quisiera acudir a los servicios públicos de salud, tendría que tomar un taxi para ir al hospital, que está lejos de su casa y es muy caro. “No puedo usar el transporte público porque no es accesible, está lejos de casa y rara vez pasa alguno en las zonas rurales”, dice.

Camila es una mujer de 57 años que vive en una zona urbana del municipio de Medellín (la segunda ciudad más grande de Colombia, después de Bogotá) donde hay [1.486 casos activos](https://vivirenelpoblado.com/covid-19-en-medellin-este-sabado-26-de-septiembre/) (a día 26 de septiembre). Ella es usuaria de silla de ruedas eléctrica y actualmente cuida de su madre y su padrastro. Camila tiene una experiencia similar a Angélica. “He sufrido mucho estrés intentando tener acceso a asistencia médica. Llamo a los hospitales pero nadie atiende o no hay citas disponibles. Los medicamentos no se entregan en nuestra casa. Mi padrastro, mi madre y yo necesitamos medicamentos, incluidos antidepresivos para mí. El hecho de que no haya estado tomando mis medicamentos ha tenido un efecto negativo en mi salud mental y episodios de extrema tristeza”. Camila explica que los medicamentos se pueden pedir por internet o por teléfono, pero deben recogerse en la farmacia. “Tenemos miedo de ir a buscarlos y contraer el virus que nos infectará a todos”, dice.

Al igual que para Angélica, el transporte público no es una opción en su región. “Los autobuses no se detienen si ven que estás en una silla de ruedas porque dicen que pierden demasiado tiempo. Esto solía suceder incluso antes de COVID-19 y no hay nada que podamos hacer. Solo hay un autobús accesible, pero está lejos de mi casa y la forma de llegar hasta ahí no es accesible. Es posible ir al metro pero los vagones no son accesibles. Hay un gran hueco y entrar en silla de ruedas eléctrica no es tarea fácil. Yo dependo de los demás para que me ayuden y en estos días nadie quiere acercarse”.

## Problemas para garantizar un ingreso

Angélica explica que no ha podido asegurar un ingreso y está luchando económicamente. “No podemos pagar el alquiler porque mi esposo ha perdido su trabajo, pero afortunadamente, mi casera aún no nos ha echado. Ahora dependemos económicamente de mi familia. No recibimos ningún apoyo del gobierno. Nos sentimos abandonados”, dice. “Nuestra dieta es muy básica y comemos lo que se pueda. No debo comer ciertos alimentos como el arroz y la harina porque tengo problemas con mi sistema digestivo, pero ahora no tengo otra opción", relata.

Camila también explica que se ha perdido su independencia económica. “Mi vida cambió drásticamente desde COVID-19 ya que antes podía generar ingresos vendiendo artesanías hechas a mano en la calle. Ahora dependo de mi familia para sobrevivir porque no puedo trabajar y no recibo ninguna ayuda del gobierno”, dice. “Cuido de mi madre y de mi padrastro, que tiene Alzheimer. Los tres vivimos de la pensión de jubilación de mi madre. Realmente no es mucho".

Ambas experimentan frustración, ya que sienten la sensación de ser una carga para sus familias. Camila cuenta que ha intentado obtener una prestación por discapacidad en múltiples ocasiones pero que ha sido muy difícil. “No hay programas de discapacidad ni una base de datos que incluya cuántas personas con discapacidad hay y dónde estamos ubicados”, dice Camila. Angélica agrega que “mi hermana necesita asistencia personal pero como no tiene suficiente dinero, sus hijos tienen que ayudarla. Es muy difícil recibir un subsidio por discapacidad, incluso cuando tienes todos los documentos ”. Ambas dicen que la mayoría de las personas con discapacidad no reciben asistencia personal, ya que muchos trabajadores sociales tienen miedo de ir a los hogares.

## Aumento del abuso doméstico

Angélica explica que el abuso doméstico ha aumentado en el hogar, haciéndola sentir asustada y sola. “Mi relación con mi esposo no es buena, el abuso verbal es más frecuente por su parte. Ha golpeado las paredes y las puertas, esto nunca antes había sucedido ”, dice.

Camila destaca que “las mujeres con discapacidad se han quedado atrás, nadie habla de aumento de la violencia y de nuestros derechos”.

## Mayor discriminación contra las personas con discapacidad

“La información es muy general, no hay instrucciones específicas para personas con discapacidad. Como la conexión a Internet es inestable y cara, incluso es difícil tener acceso a la información más básica. No creo que haya ninguna coordinación o programas dirigidos a nosotros ”, dice Angélica. Otro problema es el siguiente: “mis hermanas se avergüenzan de decir que tienen una discapacidad o de definirse como una persona con discapacidad, por lo tanto, no reciben ningún apoyo del gobierno. Todavía hay mucho estigma y prejuicio, por lo que son invisibles”.

“COVID-19 ha sido duro para todos, pero especialmente para las personas con discapacidad que no cuentan con el apoyo del gobierno. La gente se ha visto obligada a salir a la calle a trabajar, arriesgando su propia vida. No es por una falta de conciencia, sino por la necesidad de sobrevivir ”, dice Camila. “Nos sentimos abandonados. Nuestras necesidades individuales no se tienen en cuenta”.